

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Jefatura Jurídica

RESOLUCIÓN EXENTA N° 151

SANTIAGO, 03.JUL.014

VISTOS :

- a) El Principio de Probiidad Administrativa y Transparencia, establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de la República.
- b) La disposición Cuarta Transitoria de la Constitución Política de la República.
- c) La Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública y la regulación que contempla el ejercicio del derecho de acceder a la información Pública.
- d) La Ley N° 19.974, Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia.
- e) El Decreto Supremo N° 13, de fecha 02.MAR.009, que establece el Reglamento de la Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública.
- f) La solicitud presentada por **doña Javiera Ruiz Valdés**, de fecha 12.JUN.014, ingresada bajo el Sistema de Gestión de Solicitudes, folio N° **AD010C-0001488**, por medio de la cual, solicita información respecto al Anexo 50, que correspondía a una unidad de esta Institución creada en los años 30 para investigar redes nazis en Chile.

CONSIDERANDO :

- 1.- Que, conforme lo dispone el artículo 8° de la Constitución Política, los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos y sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.
- 2.- Que, la disposición Cuarta Transitoria de la Constitución Política de la República, dispone que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme la propia Carta Fundamental deban ser objeto de regulación por medio de una ley de quórum calificado, se entienden que cumplen con ese requisito, mientras no se dicten los respectivos cuerpos normativos.

3.- Que, la Policía de Investigaciones de Chile, como órgano auxiliar de la administración de justicia, constituye un servicio público cuyas funciones y misiones se encuentran expresamente establecidas en los artículos 4º y 5º de su Ley Orgánica, Decreto Ley N° 2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, las cuales consisten en "investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales".

"Corresponde en especial a la Policía de Investigaciones de Chile, contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; prevenir la perpetración de hechos delictuosos y actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público para los efectos de la investigación, así como las órdenes emanadas de la autoridades judiciales, y de las autoridades administrativas en los actos que intervengan como tribunales especiales; prestar su cooperación a los tribunales con competencia en lo criminal; controlar el ingreso y salida de las personas del territorio nacional; adoptar las medidas conducentes para asegurar la correcta identificación de las personas que salen e ingresan al país, la validez y autenticidad de sus documentos de viajes y la libre voluntad de las personas de ingresar y salir de él; fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país, representar a Chile como miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), y dar cumplimiento a otras funciones que le encomiendan las leyes".

4.- La Policía de Investigaciones de Chile, integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, constituye junto a Carabineros de Chile, la fuerza pública encargada de dar eficacia al derecho, debiendo garantizar el orden público y la seguridad pública interior del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101º de la Constitución Política de la República.

5.- El Sistema de Inteligencia del Estado, está integrado por el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesor al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales.

De acuerdo al artículo 5º de la ley N° 19.974, el Sistema de Inteligencia se encuentra integrado por: la Agencia Nacional de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional, las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Agrega el inciso final de dicho artículo, "que las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente".

La inteligencia policial es una función que corresponde exclusivamente a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo

del artículo 20° de la citada ley. Dichas actividades comprende el procesamiento de información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior.

6.- Respecto de la información solicitada, el Título VII denominado "De la Obligación de Guardar Secreto", establece en su artículo 38° que "Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas".

"Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique".

Por otra parte, señala el inciso final del artículo antes mencionado, que "los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios".

Sin embargo, se exceptúan de lo anterior de conformidad al artículo 39° de la ley, "la entrega de antecedentes e informaciones que fueren solicitadas por la Cámara de Diputados o el Senado, o que requieran los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público a través del Fiscal Nacional, o la Contraloría General de la República, en uso de sus respectivas facultades, los que se proporcionarán sólo por intermedio de los Ministros del Interior, de Defensa Nacional y del Director de la Agencia, en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 9° de la Ley N° 18.818, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, o por medio de oficios reservados dirigidos al organismo competente, según el caso".

7.- Que, dado que el artículo 38° de la Ley N° 19.974, aprobada y publicada el año 2004, es una disposición vigente, pero dictada con anterioridad a la ley N° 20.050, de 2005, que modificó el artículo 8° de la Constitución Política, debe darse aplicación a lo ordenado por el artículo 1° Transitorio de la Ley N° 20.285, según la cual indica "...de conformidad a la disposición Cuarta Transitorio de la Constitución Política, se entenderán que cumplen con las exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política". En consecuencia, la ficción que da por cumplido este quórum, exigido por la Constitución Política para validar las hipótesis legales de reserva, exige determinar que dicho artículo 38° se ajusta a alguna de las causales de reserva del texto constitucional vigente.

En razón a lo anterior, el artículo 38° antes mencionado, tiene el carácter de Ley de Quórum Calificado para todos los efectos del artículo 8° de la Constitución Política de la República, siendo por tanto, de aquellos secretos permitidos por el ordenamiento jurídico, por aplicación de la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política y el artículo 1° de las Disposiciones Transitorias de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

8.- Que, no encontrándose la solicitud de información planteada en ninguna de las hipótesis mencionadas en el artículo 39° antes señalado, la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra impedida legalmente de entregar la información solicitada.

9.- Por lo anterior, esta Policía de Investigaciones de Chile estima que la entrega, comunicación o divulgación de la información requerida, podría afectar la Seguridad de la Nación, particularmente la mantención del orden público y de la seguridad pública, bienes jurídicos protegidos en la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 3 de la Ley N° 20.285, en concordancia de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2° de la Constitución Política, ya que se podría ver afectada con ello, todos los antecedentes que se mantienen en secreto por el respectivo organismo de inteligencia policial de la PDI.

RESUELVO:

1°.- **SE NIEGA**, el acceso a la información requerida, en virtud a lo dispuesto en el artículo 21° N° 5, de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, el artículo 8° y la disposición Cuarta Transitoria, ambas de la Constitución Política de la República, y lo dispuesto en el artículo N° 38° de la Ley N° 19.974 Sobre Inteligencia del Estado, toda vez que la información solicitada por doña **Javiera Ruiz Valdés**, se encuentra al amparo de la citada ley de inteligencia del Estado, por cuanto su entrega, comunicación o difusión podría afectar la Seguridad de la Nación, específicamente el orden público y seguridad pública del Estado, por las razones anteriormente analizadas, invocándose para dichos efectos la causal de secreto o reserva contenido en el artículo 21 N° 3 de la citada ley.

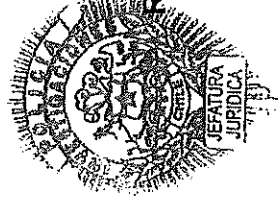
2°.- **NOTIFIQUESE**, la presente Resolución a la peticionaria, a través del correo electrónico indicado en su formulario de solicitud de acceso a la información pública, [REDACTED]



RP/dib

Distribución:
- Solicitante
- Jejur
- Archivo

(1)
(1)
(1)



ROSANA PAJARITO HENRÍQUEZ
Prefecto Inspector (J)
Jefe de Jurídica